

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



*“Al servicio de la justicia y de la paz social”*

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	EJECUTIVO
DEMANDANTE	ABELARDO ZULUAGA MARTÍNEZ
DEMANDADO	DIDIER DE JESÚS PIEDRAHITA PULGARÍN
INSTANCIA	SEGUNDA –APELACIÓN DE AUTO–
PROCEDENCIA	JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE MEDELLÍN
RADICADO	05001 31 03 007 2016 00657 01
PROVIDENCIA	INTERNO 2023-271
	AUTO INTERLOCUTORIO N° 045
TEMAS	TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO POR DESISTIMIENTO TÁCITO. MODALIDADES Y TÉRMINO PARA PROCESOS CON SENTENCIA U ORDEN DE CONTINUAR EJECUCIÓN.
DECISIÓN	REVOCA. TERMINA.
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

**Medellín, veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)**

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en el proceso de la referencia, frente al auto proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Medellín el día 30 de agosto de 2023, mediante el cual se denegó la solicitud de terminación del proceso por desistimiento tácito.

**I. ANTECEDENTES**

El presente proceso ejecutivo inició en el año 2016 ante el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín, Despacho judicial que en providencia del 18 de noviembre de 2016 ordenó seguir adelante la ejecución. Luego de lo cual se dispuso la remisión a los juzgados civiles del circuito de ejecución de Medellín, donde fue asignado para conocimiento al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Medellín que avocó conocimiento en auto del 31 de marzo de 2017, fecha en la que también se aprobó la liquidación de costas y se requirió a las partes para aportar la liquidación del crédito. Ante el juzgado de ejecución se realizaron actuaciones relacionadas con la liquidación del crédito,

avalúo de un bien, fijación de fecha de remate y diligencia de remate que no se realizó por no haberse cumplido con el arribo de los requisitos legales, siendo las últimas actuaciones, antes de la solicitud de terminación, las siguientes: (i) acta de no realización de remate por falta de requisitos de fecha 13 de julio de 2021; solicitud de fecha de remate del 4 de agosto de 2021; auto que no accede a fijar remate del 12 de agosto de 2021; memorial de acumulación de embargos del 4 de mayo de 2022 y auto tomando nota de concurrencia de embargos del 6 de julio de 2022

En memorial del 14 de agosto de 2023, el apoderado del demandado solicitó se decretara el desistimiento tácito del proceso por inactividad superior a dos (2) años, luego de lo cual, el 16 de agosto de 2023 la apoderada de la parte demandante aportó liquidación del crédito, habiendo decidido el juzgado en providencia del 1 de septiembre de 2023 no decretar el desistimiento tácito y correr traslado de la liquidación del crédito, lo anterior, aduciendo que no se cumple el término para la terminación porque la última actuación registrada data del 7 de julio de 2022 (Archivos digitales 4,5 y 6 carpeta del juzgado de ejecución).

## **II. LA IMPUGNACIÓN**

Frente al anterior proveído la parte demandada interpuso los recursos de reposición y apelación en subsidio, argumentando que la interpretación que el juzgado realizada de la norma es amañada porque la Corte Suprema de Justicia ha señalado que las actuaciones que interrumpen el término para la terminación por desistimiento tácito deben ser relevantes y en el auto del 6 de julio de 2022 notificado el 7 del mismo mes y año, se tomó nota de concurrencia de embargos, la cual no tenía como finalidad lograr el avance del proceso, sumado a que para el momento de la petición de terminación habían pasado un total de 2 años y un día (Archivo digital 08 carpeta del juzgado de ejecución).

En la oportunidad de traslado la apoderada de la parte demandante indicó que durante los años 2021,2022 y 2023 han existido actuaciones lo que impide que se concrete el término para la terminación (Archivo digital 10 carpeta del juzgado de ejecución).

En providencia del 30 de octubre de 2023 (Archivo digital 11 carpeta del juzgado de ejecución), se desestimó el recurso de reposición y se concedió la apelación subsidiariamente formulada, siendo procedente resolver de plano conforme lo manda el artículo 326 del Código General del Proceso, previas las siguientes:

### **III. CONSIDERACIONES**

#### **1. EL DESISTIMIENTO TÁCITO.**

Conocido es que el procedimiento civil está orientado por un criterio tendencialmente dispositivo de donde se infiere que corresponde a las partes por regla general, el inicio e impulso de la serie. Así mismo, corresponde al Juez brindar el impulso pertinente cuando le corresponda.

De manera que las partes tendrán la carga de cumplir con sus obligaciones procesales dentro de los términos que corresponda, así como el Juez cuando a él concierna, para que el objeto del proceso se verifique; si ello no ocurre, surgen consecuencias que afectarán a la parte incumplida, o al juez cuando la demora se atribuya a él.

Para conjurar la inercia, desidia e inactividad de las partes en satisfacer una carga procesal o desplegar un acto de procedimiento, necesarios para proseguir la actuación que ha iniciado y es de su exclusiva incumbencia, se ha previsto como remedio figuras como la actualmente denominada *desistimiento tácito*, que además ha sido prevista como mecanismo de descongestión judicial.

Dicha figura fue inicialmente establecida por Ley 1194 de 2008, modificatoria del artículo 346 Código de Procedimiento Civil y en la actualidad se encuentra reglada con notorias diferencias por el artículo 317 del Código General del Proceso, a cuyo tenor:

El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos:

1. Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el

juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado.

Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá condena en costas.

El juez no podrá ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando estén pendientes actuaciones encaminadas a consumir las medidas cautelares previas.

2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, **porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación**, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas o perjuicios a cargo de las partes.

El desistimiento tácito se regirá por las siguientes reglas:

a) Para el cómputo de los plazos previstos en este artículo no se contará el tiempo que el proceso hubiese estado suspendido por acuerdo de las partes;

b) **Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años;**

c) **Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo;**

d) Decretado el desistimiento tácito quedará terminado el proceso o la actuación correspondiente y se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares practicadas;

e) La providencia que decrete el desistimiento tácito se notificará por estado y será susceptible del recurso de apelación en el efecto suspensivo. La providencia que lo niegue será apelable en el efecto devolutivo;

f) El decreto del desistimiento tácito no impedirá que se presente nuevamente la demanda transcurridos seis (6) meses contados desde la ejecutoria de la providencia que así lo haya dispuesto o desde la notificación del auto de obediencia de lo resuelto por el superior, pero serán ineficaces todos los efectos que sobre la interrupción de la prescripción extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentación y notificación de la demanda que dio origen al proceso o a la actuación cuya terminación se decreta;

g) Decretado el desistimiento tácito por segunda vez entre las mismas

partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguirá el derecho pretendido. El juez ordenará la cancelación de los títulos del demandante si a ellos hubiere lugar. Al decretarse el desistimiento tácito, deben desglosarse los documentos que sirvieron de base para la admisión de la demanda o mandamiento ejecutivo, con las constancias del caso, para así poder tener conocimiento de ello ante un eventual nuevo proceso;

h) El presente artículo no se aplicará en contra de los incapaces, cuando carezcan de apoderado judicial. (Negritas y subrayas fuera del texto original).

## 2. CASO CONCRETO.

En el presente asunto debe iniciarse por señalar que el término de inactividad total aplicable para que proceda la terminación por desistimiento tácito, es el de dos (2) años contemplado en el literal a) del numeral 2 del artículo 317 del Código General del Proceso, en tanto, este es un proceso que *“cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución”*.

Ahora, analizado en detalle el trámite del proceso ejecutivo que da lugar a la alzada se evidencia que le asiste razón a la parte demandada recurrente al señalar que era procedente la terminación por desistimiento tácito pedida, como se pasa a detallar.

Aunque la norma establece que cualquier actuación interrumpe el término de dos (2) años aludido, incluso la suscrita defendía inicialmente esa posición, con ocasión del desarrollo jurisprudencial que en los últimos años ha realizado nuestro máximo órgano de decisión civil, la interpretación correcta de la norma se ha establecido como aquella según la cual las actuaciones que tienen la virtud de interrumpir el aludido término deben ser *“útiles, necesarias, pertinentes, conducentes y procedentes para impulsar el decurso, en eficaz hacia el restablecimiento del derecho”*<sup>1</sup>, esto es, actuaciones que procuren el impulso del proceso hacia la finalidad de pago, siendo pertinente traer a colación la sentencia que acertadamente cita el recurrente (STC1216 de 2022) donde la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, citando decisiones anteriores de esa misma Corporación explica:

---

<sup>1</sup> STC 1216 de 2022

“En segundo término, se constata que la falladora censurada, aunque apoyó su decisión en la sentencia STC11191-2020, en realidad, no comprendió su alcance y efectos, pues estimó que el interregno contenido en el literal b) del numeral 1°, artículo 317 ídem, se había suspendido con Radicación n° 08001-22-13-000-2021-00893-01 8 el pedimento realizado por el banco demandante el 4 de noviembre de 2020, con el cual buscó que el a quo oficiara a Instrumentos Públicos para que averiguara por los bienes del deudor, reclamo intrascendente, si se tiene en cuenta que el ejecutante podía obtener esa información directamente, a través de derecho de petición, como se le indicó en proveído de 13 de noviembre siguiente.

Se resalta, esta Sala estableció la aplicación del canon normativo en cita, determinando que sólo las actuaciones relevantes en el proceso pueden dar lugar la «interrupción» de los lapsos previstos en el mismo. Justamente, en la sentencia STC11191 de 9 de diciembre de 2020, para unificar las reglas jurisprudenciales de interpretación de la referida norma, sobre los procesos ejecutivos, se señaló:

«[D]ado que el desistimiento tácito consagrado en el artículo 317 del Código General del Proceso, busca solucionar la parálisis de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, la «actuación» que conforme al literal c) de dicho precepto «interrumpe» los términos para [que] se «decrete su terminación anticipada», es aquella que lo conduzca a «definir la controversia» o a poner en marcha los «procedimientos» necesarios para la satisfacción de las prerrogativas que a través de ella se pretenden hacer valer”.

“En suma, la «actuación» debe ser apta y apropiada y para «impulsar el proceso» hacia su finalidad, por lo que, «[s]imples solicitudes de copias o sin propósitos serios de solución de la controversia, derechos de petición intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi» carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo «ponen en marcha» (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020)”.

“Ahora, lo anterior se predica respecto de los dos numerales de la norma comentada, ya que además que allí se afirma que el «literal c)» aplica para ambos, mediante los dos se efectivizan los principios de eficacia, celeridad, eficiencia, lealtad procesal y seguridad jurídica. No obstante, dado que prevén hipótesis diferentes, es Radicación n° 08001-22-13-000-2021-00893-01 9 necesario distinguir en cada caso cuál es la «actuación eficaz para interrumpir los plazos de desistimiento”.

“Como en el numeral 1° lo que evita la «parálisis del proceso» es que «la parte cumpla con la carga» para la cual fue requerido, solo «interrumpirá» el término aquel acto que sea «idóneo y apropiado» para satisfacer lo pedido. De modo que si el juez conmina al demandante para que integre el contradictorio en el término de treinta (30) días, solo la «actuación» que cumpla ese cometido podrá afectar el cómputo del término”.

“En el supuesto de que el expediente «permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación (...) en primera o única instancia», tendrá dicha connotación aquella «actuación» que cumpla en el «proceso la función de impulsarlo», teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentre y el acto que resulte necesario para proseguirlo”.

“Así, el impulsor de un declarativo cuyo expediente ha estado en la «secretaría del juzgado» por un (1) año sin emplazar a uno de los herederos del extremo demandado, podrá afectar el conteo de la anualidad con el «emplazamiento» exigido para integrar el contradictorio”.

“Si se trata de un coercitivo con «sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecución», la «actuación» que valdrá será entonces, la relacionada con las fases siguientes a dicha etapa, como las «liquidaciones de costas y de crédito», sus actualizaciones y aquellas encaminadas a satisfacer la obligación cobrada”.

“Lo dicho, claro está, sin perjuicio de lo dispuesto por la Corte Constitucional (sentencia C-1194/2008), en cuanto a que el «desistimiento tácito» no se aplicará, cuando las partes «por razones de fuerza mayor, están imposibilitadas para cumplir sus deberes procesales con la debida diligencia (...)» (subrayas propias).

Dicha postura ya había sido expuesta por la Sala en providencia STC4021-2020, donde se especificó:

«No solucionar prontamente una causa, o ser negligente, torna en injusto al propio Estado e ineficaz la labor del juez; impide el acceso a la justicia a quienes, en verdad, demandan con urgencia y son discriminados o marginados del Estado de Derecho”.

Simple solicitudes de copias o sin propósitos serios de solución de la controversia, derechos de petición intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi, no pueden tenerse como ejercicio válido de impulso procesal”.

Ciertamente, las cargas procesales que se impongan antes de emitirse la sentencia, o la actuación que efectué la parte con posterioridad al fallo respectivo, deben ser útiles, necesarias, pertinentes, conducentes y procedentes para impulsar el decurso, en eficaz hacia el restablecimiento del derecho”.

Así, el fallador debe ser prudente a la hora de evaluar la conducta procesal del interesado frente al desistimiento tácito de su proceso y, especialmente, con relación a la mora en la definición de la contienda”.

Lo anterior, por cuanto, si tras de proferirse la decisión de fondo en la controversia, el expediente lleva año y medio paralizado en la secretaría del despacho, la simple petición de copias por escrito o la expedición de una certificación, no pueden ser tenidas como válidas para interrumpir el término señalado en el artículo 317 del C.G.P.

Ello, porque, verbigracia, las reproducciones del dossier y las constancias en favor de los sujetos procesales o de terceros, no requieren auto que así lo autorice y, en principio, nada aportan en el avance de las diligencias, como tampoco evidencian el deber de las partes de impedir la tardanza que tanto afecta a la administración de justicia y, en esa medida, el juez no puede cohonestarla dando por idóneos, actos superfluos de los intervinientes frente al desistimiento tácito» (negrilla fuera del texto).

Por tanto, no todo escrito interrumpe el término del desistimiento tácito;

así, para los procesos ejecutivos en los que exista sentencia o auto de seguir adelante con la ejecución, la suspensión, según lo advirtió la Sala en pasada oportunidad, «se logra únicamente con actuaciones tendientes a la obtención del pago de la obligación o actos encaminados a lograr la cautela de bienes o derechos embargables del deudor, a fin de rematarlos y satisfacer el crédito perseguido» (CSJ, STC4206-2021) y, en este caso, la petición elevada por el banco ejecutante no tenía tal mérito, pues se percibe que con ella sólo se pretendía provocar un pronunciamiento sobre una solicitud inane, dado que, se insiste, bien podía el demandante acudir, de manera directa, Radicación n° 08001-22-13-000-2021-00893-01 11 a la Oficina de Instrumentos Públicos y reclamar la información de su interés sobre los bienes del ejecutado”.

En el caso bajo examen la actuación a la que hizo mención el *a quo* para negar la terminación fue la concurrencia de embargos y toma de nota de ésta realizada en auto del 6 de julio de 2022, misma que no cumple en ninguna medida con impulsar el proceso y que ni siquiera provino de la parte demandante como interesada en la ejecución. Es que el presente proceso cuenta con un bien embargado y secuestrado y está pendiente que la parte demandante impulse el trámite de remate del mismo, actualizando el avalúo como le señaló el juzgado de primera instancia en auto del 12 de agosto de 2021, solicitando fecha para remate y cumpliendo las cargas para la realización de dicha diligencia, la cual incluso se fijó en anterior oportunidad para ser llevada a efecto el 13 de julio de 2021 y no pudo ser realizada por falta de publicación del aviso de remate.

Resulta pertinente señalar que para en el momento en que el juez de primera instancia negó la terminación habían transcurrido dos (2) años y dieciocho días (18) de inactividad de la parte demandante, sin que ésta hubiese cumplido con aportar el avalúo que le fue requerido en el proveído del 12 de agosto de 2021, a lo que se agrega que la actuación con la que la parte demandante intentó impulsar, al parecer movida por la presentación de la solicitud de terminación, ni siquiera fue el aludido avalúo pendiente, sino simplemente una actualización de la liquidación del crédito que, aunque es importante en el trámite de una ejecución, resulta insuficiente para el avance de la causa cuando lo pendiente es el impulso del remate, no siendo adecuado tampoco avalar la conducta negligente de intento de impulso únicamente cuando la parte contraria pide la terminación.



Por lo anterior, se revocará la providencia de primera instancia y se decretará la terminación del proceso y el levantamiento de las cautelas, advirtiendo que, como el juzgado de primera instancia no arrió copia del cuaderno de medidas cautelares, le corresponderá a dicho despacho emitir las órdenes precisas para concretar el levantamiento ordenado, dejando a disposición de las autoridades que corresponda, si hay lugar a ello.

No habrá lugar a imponer condena en costas porque el recurso salió adelante.

Por lo expuesto, **la suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín,**

#### **IV. RESUELVE**

**PRIMERO. REVOCAR** el auto de fecha 30 de agosto de 2023 proferido por el **JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE MEDELLIN y EN SU LUGAR** se decreta la terminación del proceso por desistimiento tácito y el levantamiento de las cautelas, advirtiendo que, como el juzgado de primera instancia no arrió copia del cuaderno de medidas cautelares, le corresponde a dicho Despacho emitir las órdenes precisas para concretar el levantamiento ordenado, dejando a disposición de las autoridades que corresponda, si hay lugar a ello.

**SEGUNDO. ABSTENERSE** de imponer condena en costas.

#### **NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE**

  
**MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO**  
Magistrada

*(Firma escaneada de conformidad con lo establecido en el artículo 105 del CGP en concordancia con la Ley 2213 de 2022)*